

C.A. de Valdivia

Valdivia, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

**Vistos y considerando:**

**Primero:** Que en rol Laboral de esta Corte N°226-2023, por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, la Jueza suplente del Juzgado de Letras del Trabajo de Los Lagos, doña Daniela Verdugo Pulgar, acoge la excepción de falta de legitimación pasiva de la Municipalidad de Los Lagos, y rechaza la misma excepción respecto del Gobierno Regional de Los Ríos; acogiendo la demanda interpuesta por Cristián Eduardo Álvarez Dimter, Adán Ademir Asencio Ojeda, Manuel Guillermo Cabrera Canario, Jeanette Judith Ávila Mora, Cristopher Leonel de la Fuente Mancilla, Cristian Javier Delgado Álvarez, Claudio Antonio Lorca Cuadra, Américo Rodrigo Mardones Opazo, Norberto Ramón Nibeyro, Moisés Antonio Rojas Sepúlveda, Moisés Antonio Rojas Sepúlveda, Roberto Isaías Sanhueza Urrutia, Felipe Andrés Silva Barria, Raúl Alberto Diocares Monsalve, Francisco Epuyao Moreira, Michel Alberto Gallardo Castillo, Enrique César Guzmán Cárcamo, Karla Verónica Martínez Calcagno, Claudio Antonio Miranda Delgado, Elizardo Evaristo Muñoz Martínez, Carlos Iván Osorio Osorio, Robinson Eduardo Pinto Cerda, Margorie Andrea Contreras Subiabre, en contra de Constructora Lahuen S.A., solo en cuanto se declara que los demandantes efectivamente prestaron servicios a la demandada en las fechas indicadas en la demanda; que sus relaciones laborales fueron de carácter indefinidos, con excepción de Norberto Ramón Nibeyro, Cristian Javier Delgado Álvarez y Manuel Guillermo Cabrera Canario; que salvas las mismas excepciones sus despidos fueron injustificados, y en su caso improcedentes; condenándose a la demandada a pagar a cada uno de los demandantes las sumas de dinero que se indican en el fallo recurrido.

Asimismo, se resolvió que las demandadas Constructora Lahuen S.A., Ministerio de Obras Públicas y Gobierno Regional de Los Ríos quedan obligadas en forma solidaria al pago de todas las prestaciones detalladas, con los reajustes e intereses que se indican en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, sin costas.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FLGDXXHDMZ

**Segundo:** Que en contra del indicado fallo, el Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que, haciendo aplicable el régimen de subcontratación, condenó al Fisco de Chile solidariamente al pago de remuneraciones, indemnizaciones por falta de aviso previo, por años de servicio y por feriado legal y proporcional.

El recurso es interpuesto por la causal de nulidad contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en la especie, el artículo 3 en relación con el artículo 183 A del Código del Trabajo, y los artículos 183 B y D del mismo Código.

En efecto, a su juicio ha existido infracción del artículo 3 en relación con el artículo 183-A del Código del Trabajo, el que al definir el trabajo bajo régimen de subcontratación señala que uno de los elementos que lo caracteriza es la ejecución de obras o servicios para una tercera persona, natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas.

Es del caso que el Fisco de Chile - Ministerio de Obras Públicas no es una empresa en los términos que así lo entiende el inciso tercero del artículo 3º del Código del Trabajo; no es una empresa, no tiene fines de lucro, ni pretende obtener ganancias. Por ende, no encaja, ni siquiera por la vía de una interpretación muy extensiva en los parámetros del tercer inciso del artículo 3º del Código del Trabajo, para entender que sus fines sean asimilables a una empresa. Al efecto hace referencia a diversos fallos sobre el particular de distintas Cortes de Apelaciones.

En subsidio de la causal anterior, se denuncia la infracción de los artículos 183 B y 183 D del Código Laboral, al aplicarse indebidamente el primero, y dejarse sin aplicación el segundo, pues el fallo condena al Fisco en carácter de solidariamente responsable.

En efecto, la sentencia que se recurre la condena en forma solidaria, de lo que se debe concluir que la sentenciadora hizo efectiva la hipótesis del artículo 183 B del Código del Trabajo, que reza:

Art. 183-B. La empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los



contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral.

Atendido que se alegó y acreditó, con los certificados de cumplimiento laboral, que durante todo el periodo trabajado por la demandante el Fisco ejerció el derecho legal de información (no hubo retención ya que los certificados daban cuentas del cumplimiento de las obligaciones), la sentencia debió condenarlos en la forma que establece para esta situación el artículo 183 D del mismo Código, que señala:

Art. 183-D. Si la empresa principal hiciere efectivo el derecho a ser informada y el derecho de retención a que se refieren los incisos primero y tercero del artículo anterior, responderá subsidiariamente de aquellas obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas y subcontratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el término de la relación laboral.

De lo desarrollado precedentemente, resulta que la sentencia aplicó a la decisión una norma que no correspondía a la situación de hecho, el artículo 183 B, y dejó sin aplicación la norma que reglamenta específicamente la situación que nos ocupa, y debiendo condenarlos como responsables subsidiarios, lo hizo en calidad de solidarios.

Si el tribunal de instancia hubiera aplicado en su debido contexto los artículos que aquí indicamos como infringidos habría tenido necesariamente que concluir que a este caso no era posible aplicar la normativa del Código del Trabajo.

Del mismo modo, y en subsidio, para el caso de estimarse aplicable la normativa laboral, en caso alguno el Fisco podría haber sido condenado en forma solidaria, sino que subsidiaria en la forma que la ley concede a las empresas que ejercen el derecho legal de información, y en su caso, de retención.

Se solicita, en consecuencia, se anule la sentencia recaída en esta causa y se dicte una de reemplazo, que efectuando una correcta aplicación de las normas infringidas, rechace la demanda en cuanto condena al Fisco, y en subsidio, declare que su responsabilidad es subsidiaria, con costas.

**Tercero:** Que en contra del indicado fallo también recurre el Gobierno Regional de Los Ríos, interponiendo recurso de nulidad en contra de la



sentencia definitiva que declara la responsabilidad solidaria de su parte, por haber rechazado la excepción de ausencia de legitimación pasiva.

El recurso es interpuesto por la causal de nulidad contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en la especie, artículos 19 y 20 del Código Civil, 183 A, 183 B, 183 C y 183 D del Código del Trabajo, al establecer la sentenciadora que su representada se encuentra en dentro de las hipótesis de subcontratación y entender que es solidariamente responsable de las prestaciones a las que fue condenada la demandada principal, rechazando la excepción de ausencia de legitimación pasiva.

Sostiene que, respecto de la excepción de falta de legitimación pasiva, ésta debió haberse acogido por encontrarnos frente a una inexistencia del régimen de subcontratación laboral con el Gobierno Regional de Los Ríos, ya que el GORE suscribió un convenio mandato con la unidad técnica (Dirección Regional de Arquitectura – MOP, Región de Los Ríos), en virtud de lo consagrado en la Ley N°18.091, que establece normas complementarias de incidencia presupuestaria, de personal y de administración financiera.

Agrega que el convenio mandato fue suscrito el día 21 de junio de 2018 entre el Gobierno Regional de Los Ríos y la Unidad Técnica, la Dirección Regional de Arquitectura – MOP, Región de Los Ríos, destinado a financiar la ejecución del proyecto denominado “Reposición Escuela Fusionada Los Lagos”, el que fue encomendado a la Dirección Regional de Arquitectura – MOP, Región de Los Ríos en relación a la supervisión técnica – administrativa de la ejecución de las obras públicas mencionadas, comprendiendo la preparación de antecedentes, los procesos de licitación, evaluación, adjudicación y contrataciones de las obras, supervisión de la ejecución de los contratos, inspección técnica de obra, visación de los estados de pago, recepciones y liquidaciones que procedan, hasta la total ejecución de la obra considerada en el proyecto antes individualizado.

Al respecto señala que el inciso 4° del artículo 16 de la ley 18.091, regula y conceptualiza los convenios mandatos completos e irrevocables (convenio de naturaleza inter administrativo, no civil) y faculta, en el caso concreto, al GORE a encomendar a los organismos técnicos del Estado (en este caso a la Dirección Regional de Arquitectura – MOP, Región de Los



Ríos) por medio de un mandato completo e irrevocable, la licitación, adjudicación, la celebración de los contratos y la ejecución de estudios, proyección, construcción y conservación de obras de cualquier naturaleza que hayan sido previamente identificadas. Asimismo, señala que el cumplimiento del mandato quedará sujeto a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone el organismo mandatario para el desarrollo de sus propias actividades, quedando, el GORE (mandante), obligado solo a solventar los respectivos estados de pago que formule la Unidad Técnica (Dirección Regional de Arquitectura – MOP, Región de Los Ríos).

Agrega que el GORE solo interviene como entidad financiera del proyecto, es decir, solo le corresponde solventar los respectivos estados de pago que generen las unidades técnicas, siendo esta última la encargada de toda la contratación y ejecución del proyecto, es decir, no existe vínculo contractual alguno entre el GORE y la demandada principal, Constructora Lahuen S.A.

De acuerdo a lo expuesto, el convenio como el de la especie, se rige por un conjunto de normas jurídicas de derecho público – de rango legal, reglamentarias y administrativas – que son las fuentes de los derechos y obligaciones de las partes, no obedeciendo por tanto a un acuerdo propiamente contractual entre las partes, por lo que no es posible aplicar el artículo 183-A del Código del Trabajo, que exige la existencia de un acuerdo contractual entre el dueño de la obra o faena y el contratista con el objeto de que este último proporcione personal que trabaje bajo su dependencia en la referida obra. De esta forma, a su juicio, para dar aplicación dicho artículo se requiere i)- Que el trabajador dependiente preste sus servicios para una persona natural o jurídica denominada contratista o subcontratista, en virtud de un contrato de trabajo; ii)- Que la empresa principal sea la dueña de la obra, empresa o faena en que se desarrollen los servicios o se ejecutan las obras; iii)- Que exista un acuerdo contractual entre el contratista y la empresa principal dueña de la obra o faena, conforme al cual aquél se obliga a ejecutar, por su cuenta y riesgo, obras o servicios para esta última; iv) Que las señaladas obras o servicios sean ejecutadas por el contratista con trabajadores de su dependencia; requisitos ii) y iii) que no se cumplirían a su juicio.



Pues bien, en el caso de autos, conforme la normativa legal citada, los demandantes no se desempeñaron bajo el régimen de subcontratación respecto del GORE, ni éste tiene la calidad de “empresa principal” respecto de su empleador. Además, no existe ningún “acuerdo contractual” que vincule al empleador de los demandantes con el GORE, ya que esta no tiene calidad de empresa principal. Agrega que, por el convenio mandato completo e irrevocable, ya indicado, y en el respectivo proceso licitatorio llevado a cabo por la Unidad Técnica (Dirección Regional de Arquitectura – MOP, Región de Los Ríos), podría interpretarse que esta tiene la calidad o condición jurídica de “empresa principal”, conforme lo define el artículo 183-A del Código del Trabajo, por el vínculo contractual existente, mas no el Gobierno Regional de Los Ríos, que opera como mero financista, no interviniendo en las decisiones del ente licitante y contratante con la empresa a la que según dichos del demandante, este pertenecía, resultando erróneo el razonamiento de primera instancia.

Hace presente, en relación al dominio de la obra, que el dueño del terreno no es el GORE. Los terrenos sobre los cuales se emplaza la obra “reposición escuela fusionada los lagos”, es un inmueble de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos; de tal forma que el GORE tiene respecto de las obras en cuestión sólo la calidad de financista de proyecto, ejecutado por la Dirección Regional de Arquitectura – MOP, Región de Los Ríos. En concordancia con lo antes señalado, la demanda interpuesta debió ser rechazada habida consideración la evidente falta de legitimación pasiva del GORE, por no darse asimismo los supuestos necesarios para la aplicabilidad del régimen legal de subcontratación por no ser dueño de modo alguno de la obra, es decir, a su respecto no concurren los requisitos de hecho de la subcontratación, establecidos en el artículo 183-A y 183-B del Código del Trabajo.

Agrega que el Gobierno Regional es un servicio público que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, de modo tal que no le empecen los compromisos u obligaciones de las Municipalidades ni de los Servicios de la Administración Central del Estado. La vinculación que mantiene el GORE, respecto de la obra en que dice haberse desempeñado el demandante, consiste en asignar



financiamiento, con cargo al denominado Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R) que establece la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente, para el servicio público que se desempeña como “Unidad Técnica”, en este caso, la Dirección Regional de Arquitectura – MOP, Región de Los Ríos, a fin de que proceda a licitar y contratar las obras. Asimismo, la supervisión técnica y administrativa de la obra de construcción, en la cual supuestamente trabajó el demandante, corresponden a la Dirección Regional de Arquitectura – MOP, Región de Los Ríos.

Sostiene que la sentencia recurrida resulta confusa y etérea, puesto que descansa en una idea errada, que consistente en suponer que por el sólo hecho de existir un Convenio Mandato completo e irrevocable entre el GORE y la Dirección Regional de Arquitectura – MOP, Región de Los Ríos, puede concluirse que se está en presencia de un régimen de subcontratación. No siempre, que una entidad contrata la realización de determinada obra o servicio a otra, habrá subcontratación en virtud de las reglas laborales.

Se ha establecido meridianamente que el GORE no puede ser considerado como una empresa en los términos del Código del Trabajo, ya que este, al definir el trabajo bajo régimen de subcontratación señala que uno de los elementos que lo caracteriza es la ejecución de obras o servicios para una tercera persona, natural o jurídica, dueña de la obra, empresa o faena, denominada empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas.

De esta forma, sostiene que los razonamientos de la juez contenidos en los considerandos catorce y quince de la sentencia impugnada, incurre en una errónea interpretación y aplicación de las normas que regulan el trabajo bajo régimen de subcontratación al considerar que su representada detenta la calidad de empresa principal y con ello hacerla responsable solidariamente de la condena establecida, desoyendo absolutamente la prueba incorporada y los argumentos contruidos al realizar las observaciones en las postrimerías del juicio.

Agrega que la sentenciadora debió acoger la excepción planteada, sin embargo, sus fundamentos han acarreado un enorme perjuicio a su representada, quien hoy se instala como responsable solidaria de las obligaciones que pesan sobre el emperador de los demandantes, pese a no



detentar realmente la calidad de empresa principal, obligándolo a cargar con yerros de un privado, sin que se verifiquen los requisitos legales, forzando la cobertura de la subcontratación, la que no corresponde aplicar, puesto que es una excepción a las normas generales sobre vínculos laborales y por ello debe ser aplicada restrictivamente.

Agrega que el vicio que puede observarse, es la dictación de una sentencia que no cumple con lo establecido en el 478 literal e) del Código del Trabajo, el cual refiere que procede la nulidad de la sentencia, cuando esta "...se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 ó 501, inciso final, de este Código, según corresponda". Señala que el artículo 459 en su numeral 4°, prescribe que la sentencia definitiva deberá contener, "El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación", cuestión que no acontece ya que el tribunal no se ha hecho cargo en lo absoluto de las argumentación planteadas más arriba, especialmente la no concurrencia de los requisitos para que proceda el régimen excepcional y restrictivo de la subcontratación, especialmente, que su representada no es empresa principal, ni es dueña de la obra, y que además no existe un acuerdo contractual entre el contratista y el GORE de Los Ríos, como exige la norma.

Sostiene que la infracción de ley denunciada influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia por cuanto, si el tribunal de la causa hubiese interpretado y aplicado correctamente el artículo 183- A y siguientes del Código del Trabajo y no hubiese infringido, así, el artículo 477 del Código del Trabajo habría tenido que concluir que no existe régimen de subcontratación entre las partes del presente juicio, ya que su representada no es empresa principal, ni es dueña de la obra, y que además no existe un acuerdo contractual entre el contratista y el GORE de Los Ríos, lo que significa una abierta ausencia de los requisitos estrictos y copulativos de las normas que regulan la subcontratación en Código del Trabajo, en el artículo 183-A.

Finalmente solicita se acoja el recurso de nulidad interpuesto, se anule y deje sin efecto parcialmente la mencionada sentencia, en la parte que resuelve "Que se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, y se rechaza la misma excepción respecto del Gobierno Regional de Los Ríos", y en la parte que resuelve que





las demandadas Constructora Lahuen S.A., Ministerio de Obras Públicas y Gobierno Regional De Los Ríos quedan obligadas en forma solidaria al pago de todas las prestaciones detalladas precedentemente, atendido lo dispuesto en los considerandos 14º y 15º de la presente sentencia. Pide se dicte sentencia de reemplazo, determinando que se acoge la excepción de falta de legitimidad pasiva opuesta por el Gobierno Regional de Los Ríos, omitiéndose pronunciamiento respecto de la acción deducida en calidad de demandada solidaria/subsidiaria, rechazándose la demanda respecto de su representada, con costas.

**Cuarto:** Que la sentencia recurrida, en su considerando décimo cuarto, señala que “en cuanto la relación Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Arquitectura los Ríos y el Gobierno Regional de los Ríos, respecto de Constructora Lahuen S.A., respecto a la obra pública Reposición Escuela Fusionada de Los Lagos, es de subcontratación, regulada por el artículo 183-A, ya referido, toda vez son empresas principales o dueñas de la obra en los términos del referido artículo, concepto que ha sido debidamente especificado en cuanto su extensión por la Corte Suprema unificando jurisprudencia, como se referirá más adelante.

En cuanto al MOP, Dirección de Arquitectura Los Ríos, para afirmar lo anterior se tienen especialmente presentes los siguientes antecedentes:

1)- Que a través del convenio mandato entre el GORE y la Dirección de Arquitectura del MOP Región de los Ríos, como Unidad Técnica, el primero le confirió al segundo mandato completo e irrevocable, comendándole la supervisión técnica y administrativa del proyecto, y se indica que dicha supervisión comprendería la licitación, adjudicación y celebración de los contratos que procedan para la ejecución del proyecto, así como la supervisión directa de lo contratado hasta su total terminación (páginas 2 y 3 del contrato referido).

2) El MOP tenían un Inspector Fiscal, nombrado, agente público, en la obra, el Sr. Muñoz Lucares, cuyo nombramiento a través de decreto o resolución también está considerado en el convenio mandato 4.5. como obligación de parte del MOP, a quien se indica como responsable de la obra con la experiencia necesaria, de acuerdo con la magnitud del o los contratos, documento que debía enviarse al GORE (página 4, punto 4.5).

3) Que el MOP en calidad de Unidad Técnica es quien adjudicó y



suscribió contrato con Constructora Lahuen, en calidad de mandante, y la segunda, en calidad de contratista respecto de la obra, quien claramente no ejecutaba una obra propia.

4) Que fue el MOP a través del acto administrativo correspondiente quien puso término anticipado el 15 de abril de 2022 al contrato, ya que el contratista, Constructora Lahuen S.A., le informó su retiro completo de obra a contar del 31 de marzo de 2022.

5) Más relevante aún, es el mismo MOP quien reconoce gestiones propias de la subcontratación como control y envío de documentación para que GORE pagara los EP, y sostiene en su contestación que satisface lo dispuesto en el artículo 183 C del Código del Trabajo, esto es, el ejercicio del derecho de información, solicitando a la contratista documentos referidos a la entrega de certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, en donde, a su vez, la empresa informaba del cumplimiento de las obligaciones para con sus trabajadores. Respecto de lo cual en cuanto a su prueba documental incorporó 26 estados de pago, debidamente singularizados en el considerando 4º, alegando que consta en cada uno de los estados de pago el correspondiente Certificado de Cumplimiento de Obligaciones laborales, más retenciones en los estados en que no hubo aplicación de multa, por lo que el Fisco de Chile-MOP.

Respecto del GORE, los antecedentes de base a lo sostenido son los siguientes:

1) El mismo convenio mandato, en que esta institución se menciona como mandante del MOP, da cuenta de que en el ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrá un sistema de información, apoyo y coordinación entre las partes, -GORE y MOP-que tiene por objeto cautelar la eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, fiscalización y control que la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno Regional impone al mandante (página 3. 1.3.).

2) El convenio mandato establece la remisión por parte de la Unidad Técnica de los antecedentes de licitación (página 4, 4.5), antecedentes previos a la adjudicación (página 5, 5.1) en incluso decreto o resolución de adjudicación (5.2), documentos respecto a. eventuales modificaciones.

3) Las boletas de garantía se suscribieron a nombre del GORE como



lo ordena el punto 8.3 del convenio mandato, y se obliga a proporcionar a la unidad técnica los gastos administrativos para sus funciones 9.1 Asimismo la Unidad Técnica debía rendirle cuenta de gastos.

4) El GORE tenía la responsabilidad de solventar los Estados de Pago, distinguiendo la documentación a acompañar por la Unidad Técnica de manera mensual a los mismos dependiendo del tipo de ítem, informándole avance financiero y físico de la obra, remisión de factura a nombre del GORE, detalle de estado de retenciones, certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente de la inspección del Trabajo que acredite que el contratista y/o el subcontratista no tiene obligaciones laborales ni reclamaciones pendientes en relación a la obra de aquellos trabajadores dependientes que se desarrollen en la ejecución de la obra, entre otros (X. De los estados de pago).

5) En cuanto a las visitas a terreno se contemplaba la facultad del GORE de realizar visitas e inspeccionar proyectos ejecutados, hacer observaciones a la Unidad Técnica, y otorgarle colaboración, teniendo la UT obligación de resolverle dudas o entregar información solicitada (XV. De las visitas a terreno).

6) Más relevante aun, respecto a obligaciones propias del régimen de contratación, cuando se actúa como empresa principal, se indica expresamente en el convenio mandato específicamente lo siguiente: “17.3 Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Regional de Los Ríos queda facultado para ejercer el derecho de retención e información establecidos en el artículo 183-C del Código del Trabajo, respecto al consultor o contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogación las acreencias laborales de éste. La Unidad Técnica deberá incorporar expresamente la presente cláusula en los contratos de obra que celebre con el contratista”, en el mismo sentido consta de la profusa prueba documental acompañada por esta demandada, referida en el considerando 2) bajo el N° 8 21 certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. En si da cuenta de sus propios actos en reconocimiento del régimen. A lo dicho, y efecto de contexto, la testigo del GORE Edith Monardes Balcázar, quien indicó ser analista de inversiones de proyectos financiados a través de FNDR, y que conocía el proyecto de la causa, Escuela Fusionada Los Lagos, porque estuvo a su cargo, dio cuenta también de lo referido hasta aquí al indicar que



el GORE es Unidad financiera y no paga hasta que se demuestre que hay algo pagable, y que hasta el minuto se han cancelado leyes laborales y prestaciones de los trabajadores que no han demandado, respecto a los que demandaron se está esperando el resultado del juicio.

Dicho lo anterior, se menciona que Constructora Lahuen S.A. tenía respecto de las anteriores el carácter de contratista, a quien se encargó la realización de las obras por su cuenta y riesgo, a través de un contrato a suma alzada, y con sus trabajadores.

Por otra parte, ha quedado acreditado, y como se ha referido en detalle previamente, que los 22 trabajadores demandantes, ingresaron a prestar servicios contratados por Constructora Lahuen S.A. contratista, con posterioridad al 15 de octubre de 2019, fecha en que se adjudicó la obra a la demandada principal, y respecto de los cuales, a más tardar el 31 de marzo de 2022, se les puso término a sus relaciones laborales, y en que hizo abandono de la obra la demandada principal, poniéndose termino anticipado con posterioridad, el 15 de abril de 2022, por lo que sus pretensiones se encuadran dentro del periodo de relación de subcontratación entre las demandadas.

A este respecto la Corte Suprema ha reconocido la procedencia de aplicar el estatuto jurídico de la subcontratación y las consecuencias previstas en los artículos 183-A y siguientes del Código del Trabajo, a una entidad u organismo de la Administración del Estado, asignándole la calidad de dueño de la obra y, consecuentemente, la calidad de responsable solidario de las prestaciones ordenadas a pagar. En tal sentido ha indicado lo siguiente: “el concepto empresa está referido a toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. En este contexto la expresión “empresa” que está ligada a la noción de dueño de la obra, faena o servicio no excluye a ciertas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, porque la ley no establece otra limitación que la referida a la persona natural que encarga la construcción de una edificación por un precio único prefijado, conforme lo establece el inciso final del artículo 183-B del Código del Trabajo; por lo mismo, no es relevante o no tiene incidencia en el análisis el hecho que la persona jurídica forme parte de la administración del Estado, pues, a la luz



de la primera norma citada, no constituye una circunstancia que libera de responsabilidad respecto de las obligaciones laborales y previsionales de trabajadores que se desempeñan bajo régimen de subcontratación” (...) “que la inexistencia de lucro no tiene incidencia para determinar si se está en presencia de un trabajo en régimen de subcontratación, porque tratándose de un órgano de la administración del Estado nunca se experimentará, dado que, en definitiva, es la comunidad la que se beneficia con la ejecución de la obra o la prestación del servicio; ” (Rol 8646-2014, 26 de enero de 2015, considerando 6º y 7º, sentencia rechazó unificación de jurisprudencia interpuesta por el MOP con el objeto de que se estableciera jurisprudencialmente que no cabe a su respecto el régimen en comento).

Asimismo, y siguiendo la misma línea jurisprudencial, la Corte Suprema ha especificado que “Noveno: Que, en consecuencia, lo sustancial para configurar un régimen de responsabilidad en el ámbito de la subcontratación laboral es que sea ejecutada para quien es dueño de la faena, en cuanto concepto material relacionado con el sometimiento de la empresa contratista a su mando y dirección para efectos de disponer y controlar el cumplimiento del acuerdo respectivo. En otras palabras, en el contexto de la subcontratación, tiene el carácter de empresa principal no sólo aquella que es jurídicamente dueña de la obra específica, sino que también la entidad que se reserva para sí algún grado relevante de poder de dirección sobre la contratista, en cuanto le permite fiscalizar y orientar la ejecución del contrato en que se consagra el encargo, lo que en definitiva está relacionado con el fin que persigue y en el cual tiene un interés propio comprometido” (Corte Suprema, unificación de jurisprudencia, Rol 84543-2021, 17 de febrero de 2023). En el mismo sentido los fallos de la Corte Suprema en Rol 71427-2021, Rol 29877-2019, Rol 4477-2019, Rol 29237-2018, Rol 30292-2017, Rol 62013-2016, Rol 13153-2015, Rol 10188-2015, Rol 9345-2015, Rol 7976-2015, Rol 6897-2015, Rol 5177-2015, Rol 10087-2015, Rol 10185-2015, Rol 9447-2015, Rol 9445-2015.

En referencia al rol del Gobierno Regional de Los Ríos, en referencia a los antecedentes facticos y contractuales que ya fueron referidos, tales como solventar los estados de pago, ejercicio de la facultad fiscalizadora supervigilarte, estableciéndose un sistema de información, apoyo y coordinación entre las partes, -GORE y MOP-, y en especial, y tal como lo



reconoce en la demanda y consta de la prueba acompañada el dejar constancia de estar facultado para ejercer el derecho de retención e información establecidos en el artículo 183- C del Código del Trabajo, respecto al consultor o contratista, coincide con situaciones similares ya conocidas por la Corte Suprema en las que se ha indicado lo siguiente: “Desde ya, es palmario para esta Corte, que labores o tareas que se denominan como de “coordinación” de una obra de construcción, como la de la especie, y que, además, incluye el pagos de avances y actividades anexas a dicha tarea –todo ello considerado en la esfera del examen de procedencia del régimen de subcontratación laboral–, configuran una situación jurídica, cuya naturaleza es más compleja que la de un simple encargo que pretende sujetarse a las reglas del Código Civil, como se falla en la decisión impugnada, sino que, al contrario, demuestran, de parte de la empresa analizada, una intensidad mayor, en relación a su nivel o grado de involucramiento material, con la manera en que se ejecuta la obra encargada y se cumplen las obligaciones laborales por parte de la empresa contratista, desde que tales potestades consideran en sí, cierto grado de fiscalización de su gestión, que el otorga un evidente influjo sobre ella, que hace imposible estimarla un mero mandatario, sino que, por el contrario, la constituye como empresa principal, en los términos del artículo 183-A del Código del Trabajo” (Corte Suprema, rol 15843-2019, 4 de agosto de 2020, sentencia de unificación de jurisprudencia, considerando 12).

Atendidos los motivos expresados, con respecto al demandado Gobierno Regional de Los Ríos, se rechazará su excepción de falta de legitimación pasiva.”

Por otra parte, en su considerando **décimo quinto**, la sentencia señala “Que, la responsabilidad que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y al Gobierno Regional de Los Ríos, en este caso, es de carácter solidario, ya que no se ha acreditado en juicio el uso de los derechos de información y retención que consagran los artículo 183 C y D del Código del Trabajo a la época en que se verificaron los despidos de los demandantes, ya que debieron haber retenido y pagado a los actores las prestaciones adeudadas al término de la relación laboral, lo que en la especie no probó haber realizado.

A este respecto hay que señalar que si bien estas demandadas



rindieron prueba en relación con el ejercicio al derecho a la información que estipula la ley, ello solo abarcó hasta enero de 2022, entre 1 mes y medio y dos meses antes del despido de la mayoría de los trabajadores.

Por otra parte, la obligación que debía cumplir, para poder optar a que su responsabilidad sea de carácter subsidiaria, era retener y pagar las prestaciones pendientes, las que en este caso incluía remuneraciones, obligación que no fue cumplida.”

**Quinto:** Que, tratándose de una causal relacionada con la interpretación de una ley, es necesario analizar la jurisprudencia en relación con el sentido y alcance del artículo 183-A del Código del Trabajo.

Al efecto, la Corte Suprema por sentencia de fecha 4 de septiembre de 2023, recaída en recurso de unificación de jurisprudencia, Rol 67.652-2022, razonó, en el considerando sexto: “... que el criterio adoptado hace larga data, responde a entender que la expresión "empresa" que está ligada a la noción de dueño de la obra, faena o servicio, utilizada por el artículo 183-A del Código del Trabajo, no excluye a ciertas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, porque la ley no establece otra limitación que la referida a la persona natural que encarga la construcción de una edificación por un precio único prefijado, conforme lo establece el inciso final del artículo 183-B del Código del Trabajo; por lo mismo, no es relevante o no tiene incidencia en el análisis el hecho que la persona jurídica forme parte de la administración del Estado, pues, a la luz de la primera norma citada, no constituye una circunstancia que libera de responsabilidad respecto de las obligaciones laborales y previsionales de trabajadores que se desempeñan bajo régimen de subcontratación.”

**Sexto:** Que en la sentencia recurrida ha quedado asentado que no se ha acreditado en juicio el uso de los derechos de información y retención que consagran los artículos 183 C y D del Código del Trabajo a la época en que se verificaron los despidos de los demandantes, ya que debieron haber retenido y pagado a los actores las prestaciones adeudadas al término de la relación laboral, lo que en la especie no probó haber realizado, como se expresa en el considerando décimo quinto de la referida sentencia, por lo que la responsabilidad que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y al Gobierno Regional de Los Ríos, en este caso, es de carácter solidario, ya que la obligación que debía cumplir, para poder optar a que su



responsabilidad sea de carácter subsidiaria, era retener y pagar las prestaciones pendientes, las que en este caso incluía remuneraciones, obligación que no fue cumplida, tal como lo sostiene la sentencia.

**Séptimo:** Que, conforme con lo razonado en la sentencia de Unificación de Jurisprudencia transcrita, la interpretación correcta en cuanto al sentido y alcance del artículo 183-A del Código del Trabajo, es aquella que fue razonada por la sentenciadora de la presente causa, con lo cual la sentencia recurrida no incurrió en infracción de ley al declarar que se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva del Gobierno Regional de Los Ríos y que resolvió que las demandadas Constructora Lahuen S.A., Ministerio de Obras Públicas y Gobierno Regional de Los Ríos quedan obligadas en forma solidaria al pago de todas las prestaciones detalladas.

En virtud de lo expuesto, normas citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 474, 477, 479 y 482, todos del Código del Trabajo, se resuelve:

Que **se rechaza, sin costas**, los recursos de nulidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, y por el Gobierno Regional de Los Ríos, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de mayo del presente año, por el Juzgado de Letras y Trabajo de Los Lagos, declarándose que no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro (S) Sr. Carlos Acosta Villegas.

N° Laboral - Cobranza-226-2023.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FLGDXXHDMZ



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia integrada por Ministro Sr. Juan Ignacio Correa Rosado, Ministra Sra. María Soledad Piñeiro Fuenzalida y Ministro Suplente Sr. Carlos Acosta Villegas, quienes no firman no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo por encontrarse con permiso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, el primero y en comisión de servicios, el último. Valdivia, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés.

En Valdivia, a veintidos de septiembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FLGDXXHDMZ